

24 de septiembre de 2019

Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico
P.O. Box 192018
San Juan, Puerto Rico 00919-2018

Estimados miembros de la Junta de Supervisión Fiscal:

Les escribimos en apoyo a los cientos de miles de puertorriqueños que salieron a las calles para que su gobierno les rindiera cuentas y lograron que el gobernador Rosselló renunciara. La corrupción de su administración y los comentarios profundamente ofensivos hacia las mujeres, la comunidad LGBT, las personas de color y las víctimas del huracán María eran inaceptables, y su renuncia nos llena de esperanza.

Sin embargo, es evidente que esta movilización histórica e inspiradora va mucho más allá de un individuo. El pueblo de Puerto Rico está en busca del control democrático de su futuro y no solamente exigieron la renuncia del gobernador Rosselló, sino también del fin del control de la Junta de Supervisión Fiscal sobre las decisiones económicas de la isla. Estamos de acuerdo con las exigencias del pueblo puertorriqueño que salió a la calle: Puerto Rico no debe ser tratado como una colonia.

En este momento de lucha por una gobernanza receptiva y legítima, le instamos a revertir las medidas de austeridad impuestas a Puerto Rico. Como mínimo, el proceso incierto de sucesión y la fragilidad de las instituciones políticas de Puerto Rico no debe ser utilizado como excusa para fortalecer el poder de una Junta no electa sobre la vida cotidiana del pueblo de Puerto Rico.

Les recordamos que más de medio millón de residentes han abandonado la isla desde el 2010, y el ritmo de la emigración ha aumentado desde el huracán María. A dos años del paso de este fenómeno atmosférico, todavía treinta mil puertorriqueños viven bajo toldos azules. La isla ya ha sufrido suficiente después de una década perdida sin crecimiento económico. A pesar de la asistencia federal inadecuada y las necesidades insatisfechas en toda la isla, el Plan Fiscal más reciente aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal insiste en recortar los programas de educación y salud pública de Puerto Rico. Esto incluye cientos de millones de dólares en recortes a Medicaid y a la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal también propuso un recorte del 10 por ciento a las pensiones de los funcionarios públicos retirados quienes pagaron estos beneficios a través de años de arduo trabajo, y logró un acuerdo tentativo del 8.5 por ciento en recortes. Es inaceptable que se les reduzcan los beneficios de retiro a quienes los pagaron por tantos años de arduo trabajo.

El Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal también se enfoca en producir un superávit fiscal significativo al priorizar las demandas de los fondos buitres de Wall Street por encima de las necesidades del pueblo puertorriqueño. El superávit anticipado se ha más que duplicado desde que se publicó el primer Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de haber pocos cambios en los supuestos subyacentes de la Junta. En vez de ser utilizado para la inversión social o pública para aliviar el sufrimiento del pueblo e impulsar la economía de la isla, es probable que

el excedente termine en manos de los fondos de inversiones y los banqueros para pagar la deuda que, en gran parte fue, comprada en el mercado secundario por una fracción de su valor.

Los términos del acuerdo con los acreedores son mucho más generosos que lo que los estimados a largo plazo de la Junta indican que Puerto Rico puede pagar. Las predicciones poco realistas y las propuestas de reestructuración de la deuda de la Junta solo servirán para socavar el futuro de la economía de Puerto Rico. A los fondos de buitres no se les debe permitir obtener enormes ganancias a expensas del pueblo puertorriqueño.

Además, nos preocupa la alarmante evidencia de la mala administración interna y los conflictos de intereses de la Junta de Supervisión Fiscal. El propio presupuesto de la Junta, pagado por los contribuyentes de Puerto Rico, asciende a más de \$ 300 millones al año, una cifra asombrosa para una institución que promueve políticas de austeridad. En comparación, el presupuesto anual de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos (CBO) es de \$50.7 millones. Dicha oficina le provee un análisis económico a nivel nacional al Congreso de los Estados Unidos. Si el presupuesto de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos (CBO) coincidiera con el de la Junta de Supervisión Fiscal, comparándolo y ajustándolo con su función analítica de la economía, recibiría \$ 85 billones anuales.

Entendemos que la gran mayoría de los fondos de la Junta de Supervisión Fiscal están siendo utilizados para cubrir gastos de abogados y consultores que no están sujetos a ningún requisito de divulgación pública. Por ejemplo, McKinsey & Company ha recibido más de \$ 50 millones en contratos de asesoría para la Junta de Supervisión Fiscal y también es titular de parte de la deuda puertorriqueña. Esto puede garantizarles millones a sus inversionistas, a través de cualquier posible reestructuración. Esto es un desprecio evidente en relación a las normas de conflicto de intereses.

Se ha comentado que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal han formado parte de instituciones gubernamentales que contrajeron miles de millones de dólares en deuda; sirvieron como funcionarios en bancos que suscribieron esa deuda; y actualmente tienen relaciones familiares con algunas personas que tienen vínculos con las instituciones financieras más grandes de Puerto Rico. Según el estatuto federal, los miembros de la Junta deben proveer informes financieros y reconocer cualquier conflicto de interés. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por el aparente incumplimiento de la ley.

Por ejemplo, los informes financieros de 2017 del presidente José B. Carrión, no enumeran ni una sola cantidad en dólares que recibió de terceros como compensación. El miembro de la Junta, Carlos M. García, tampoco reveló los totales de compensación. Estos informes incompletos hacen imposible la tarea de evaluar el alcance total de posibles conflictos de intereses.

A la medida que el pueblo puertorriqueño exige de transparencia y rendición de cuentas de sus líderes políticos, creemos que la Junta de Supervisión Fiscal debe atender este llamado. Les pedimos que antes del 4 de octubre de 2019, nos provean a los miembros del Congreso que suscriben, la siguiente información:

- Una explicación detallada del creciente superávit fiscal disponible para los acreedores a pesar de la ausencia de cambios significativos en los supuestos económicos de la Junta de Supervisión Fiscal, así como la justificación económica de la Junta para recortes a la salud, la educación y las pensiones.
- Un análisis de los impactos esperados de los recortes presupuestarios propuestos por la Junta a los gastos de salud y educación en relación a la trayectoria del crecimiento económico, la emigración y la desigualdad de Puerto Rico.
- Todos los documentos relacionados con los acuerdos de consultoría de la Junta de Supervisión Fiscal con entidades, como McKinsey & Company y Citigroup Global Markets Inc., que podrían beneficiarse financieramente de un eventual acuerdo de repago a la deuda.
- Materiales relacionados con las políticas de la Junta sobre conflictos de intereses y otras medidas internas para evitar la influencia financiera por intereses especiales.
- Un recuento detallado de los relaciones profesionales o familiares de cada miembro con cualquier institución y persona que tenga la deuda de Puerto Rico o mantenga contratos con la Junta, y revelaciones financieras exhaustivas de cada miembro de la Junta, incluyendo detalles de compensación externa.

Instamos que se realice una moratoria de pagos de deuda y negociaciones sobre la deuda hasta que se cumpla una auditoría independiente sobre los conflictos de intereses y todos los miembros de la junta estén absueltos por conflictos de interés.

El gobierno federal ha tratado injustamente a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico por demasiado tiempo. Puerto Rico ha pasado por décadas de negligencia económica, deudas aplastantes, austeridad devastadora, un huracán catastrófico y una crisis humanitaria que provocó unas 3,000 muertes estimadas, muchas de las cuales fueron evitables, como resultado de la respuesta federal inadecuada.

Los puertorriqueños han alzado su voz. El pueblo rechaza la austeridad y exige una gobernanza democrática, un crecimiento económico ampliamente compartido y la autodeterminación, aspiraciones fundamentalmente contrarias tanto a las prescripciones políticas como al funcionamiento interno de la Junta de Supervisión Fiscal. Le agradecemos de antemano su pronta y detallada respuesta a nuestras interrogantes, y la consideración de nuestro llamado para revertir inmediatamente la austeridad y los recortes al gasto social y público en la isla.

Atentamente,